



Opinión España frente a la proliferación de armas de destrucción masiva: estrategia necesaria en un escenario cada vez más incierto

A propósito de la Orden PJC/89/2026, de 10 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La publicación de la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) mediante la Orden PJC/89/2026 confirma algo que los analistas de seguridad llevan años señalando: el riesgo de proliferación ya no pertenece únicamente al ámbito de la diplomacia o de la geopolítica clásica. Hoy es un desafío que atraviesa la seguridad internacional, el control tecnológico, el comercio estratégico y la protección del territorio nacional.

En ese contexto, España actualiza su marco estratégico con el objetivo de coordinar instituciones, anticipar amenazas y reforzar su papel en los sistemas internacionales de control. La iniciativa llega en un momento donde la proliferación no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más compleja y menos visible.

Una amenaza que ha cambiado de forma

Durante décadas, el debate sobre armas de destrucción masiva estuvo dominado por los arsenales nucleares de las grandes potencias. Ese escenario sigue siendo relevante, pero hoy la preocupación se ha desplazado hacia actores estatales emergentes, redes de transferencia tecnológica y posibles usos por actores no estatales.

La nueva estrategia reconoce esta evolución y amplía su enfoque: no se limita a armas nucleares, químicas o biológicas, sino que incorpora también tecnologías duales, materiales sensibles y cadenas de suministro globalizadas. En un mundo donde los conocimientos científicos circulan con rapidez, la proliferación puede surgir tanto de un programa militar clandestino como de un uso indebido de tecnologías civiles.

Coordinación institucional: la clave del sistema

Uno de los elementos más relevantes de la estrategia es el énfasis en la coordinación entre organismos del Estado. Ministerios, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de inteligencia, autoridades aduaneras y organismos reguladores deben actuar como un sistema integrado.

La proliferación moderna no se detecta únicamente en laboratorios o instalaciones militares; a menudo se manifiesta en operaciones comerciales aparentemente ordinarias, transferencias tecnológicas o movimientos financieros complejos.

Por eso la estrategia insiste en reforzar los mecanismos de intercambio de información y análisis conjunto. Sin esta cooperación, cualquier sistema de control queda inevitablemente fragmentado.

España en el sistema internacional de no proliferación

La estrategia también reafirma el compromiso español con los principales regímenes internacionales de control: el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención sobre Armas Químicas, la Convención sobre Armas Biológicas y los diversos regímenes multilaterales de exportación.

En términos diplomáticos, el documento busca consolidar la imagen de España como actor responsable en el sistema internacional de seguridad. No se trata solo de evitar riesgos internos, sino de contribuir a la estabilidad global.

Sin embargo, este compromiso también exige recursos técnicos y administrativos que no siempre reciben la atención pública que merecen.

El desafío tecnológico: cuando la frontera entre civil y militar se difumina



Uno de los puntos más interesantes de la estrategia es su reconocimiento de la creciente importancia de las tecnologías de doble uso. Sectores como la biotecnología, la inteligencia artificial aplicada a sistemas militares o la fabricación avanzada pueden tener aplicaciones civiles legítimas y, al mismo tiempo, potencial militar.

Esto obliga a las autoridades a equilibrar dos objetivos aparentemente contradictorios: proteger la seguridad nacional sin frenar la innovación científica y empresarial.

El reto es considerable. Un control demasiado rígido puede limitar la competitividad tecnológica; uno demasiado flexible puede abrir brechas de seguridad.

La dimensión preventiva: más allá del control policial

Aunque la estrategia incluye mecanismos de vigilancia y control, su enfoque no se limita a la reacción ante amenazas. También apuesta por prevención, cooperación internacional y sensibilización del sector privado.

Empresas, universidades y centros de investigación se convierten en actores clave. Son ellos quienes manejan muchas de las tecnologías sensibles que podrían ser objeto de desvío o transferencia indebida.

La seguridad, en este ámbito, deja de ser exclusivamente estatal para convertirse en una responsabilidad compartida.

Una estrategia necesaria, pero de eficacia difícil de medir

Como ocurre con muchas políticas de seguridad nacional, el éxito de la estrategia será difícil de evaluar públicamente. Si funciona bien, lo más probable es que no ocurra nada visible: ningún incidente, ningún caso de proliferación detectado en territorio nacional.

Este carácter preventivo explica por qué estas políticas suelen recibir menos atención que otras áreas de seguridad. Sin embargo, su importancia es evidente: en materia de armas de destrucción masiva, el margen de error es prácticamente inexistente.

Conclusión: vigilancia constante en un mundo más complejo

La Estrategia Nacional contra la Proliferación de ADM refleja una realidad incómoda pero ineludible: las amenazas estratégicas del siglo XXI no desaparecen, solo cambian de forma.

España refuerza con este documento su capacidad de anticipación y coordinación, adaptándose a un entorno donde la proliferación ya no depende únicamente de grandes programas militares, sino también de redes tecnológicas y comerciales globales.

La estrategia no elimina el riesgo, pero contribuye a gestionarlo de forma más coherente. Y en un ámbito donde las consecuencias de un fallo serían incalculables, esa capacidad de anticipación es, probablemente, la mejor herramienta de defensa disponible.